

Bogotá D.C., agosto de 2021.

Señores

ALLIANZ SEGUROS S.A.

Departamento de Reclamaciones

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOS- Lesiones y/o Homicidios

reclamacioneslesionesyhomicidios@allianz.co

Calle 72 No. 6-44

Tel. (1) 5188787 - 5188444

Ciudad

Referencia. Reclamación de indemnización por Homicidio Culposo (accidente de tránsito)- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Autos ZAP 957.

CLAUDIA PATRICIA QUINCHE FÚNEME, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Bogotá, abogada en ejercicio, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.574.650, portadora de la tarjeta profesional No. 266.712 del C.S. de la J., y **YULY ALEXANDRA SOLANO SOLANO**, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Bogotá, abogada en ejercicio, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.168.214, y portadora de la tarjeta profesional No. 171.144 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderadas de la señora **Adriana Ximena Carvajal Cutiva**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 67.031.001, por medio de la presente, y con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el día 19 de agosto del año 2020, en el que perdió la vida su señora madre Luz Stella Cutiva Gutiérrez (Q.E.P.D.), efectuamos reclamación ante ustedes, en aras de afectar la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del vehículo asegurado con las placas ZAP 957, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a nuestra poderdante.

- *En consecuencia, a continuación procederemos a esbozar los supuestos fácticos y montos correspondientes a la indemnización por vía de reclamación en ésta instancia.*

Siguiente a esto es preciso mencionar que los perjuicios causados o los daños son de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial.

Dentro de los **PERJUICIOS PATRIMONIALES** encontramos el **Daño emergente**, que son todos los emolumentos o gastos consignados por parte de la víctima o sus familiares para atender la calamidad y los eventos que se deriven del daño, como lo son los gastos de traslado a la exequias, y demás que se requieran y que se generaron con ocasión al daño proporcionado por el victimario.

“Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento;...” (Código Civil Art.1614)

Y el **Lucro Cesante**, aquel valor que no ingresó, o no ingresará al patrimonio de la víctima. *“Lo que no se ganó o indefectiblemente no se ganará”.*

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 1614 C.C. *“Entiéndese por... lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento.”*

En cuanto a los **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES**, encontramos el **Daño Moral**. (Sentencia mayo 11 de 1976-C.S.J.): *"Por el aspecto de los perjuicios morales es obvio que la muerte o la invalidez accidentales de una persona puede herir los sentimientos de afección de muchas otras y causarles sufrimientos más o menos intensos y profundos. En principio, todos estos ofendidos estarían legitimados por el daño que cada uno de ellos recibe para demandar la reparación correspondiente, pero... la doctrina y la jurisprudencia han considerado necesario reservar ese derecho a aquellas personas que por sus estrechas vinculaciones de familia con la víctima del accidente, se hallan en situación que por lo regular permite presumir con la certeza que requiere todo daño resarcible, la intensa aflicción que les causa la pérdida del cónyuge o de un pariente próximo. Obvio es, que derivándose fundamentalmente este derecho de las relaciones de familia, el demandante del resarcimiento de daños morales sólo ha de legitimarse en causa mediante la demostración de tales relaciones con las respectivas partidas del estado civil."*

Seguidamente, el **Daño a la Vida en Relación**; consistente en la pérdida de la oportunidad para gozar de la vida, en verse privado de vivir en las mismas condiciones que sus congéneres, en la pérdida de la posibilidad de realizar actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia.

Puede ser sufrido por la víctima directa del daño o por otras personas cercanas a ella, por razones de parentesco o amistad, entre otras. Así, en muchos casos, parecerá indudable la afectación que – además del perjuicio patrimonial y moral – puedan sufrir la esposa y los hijos de una persona, en su vida de relación, cuando ésta muere.

I. HECHOS.

PRIMERO. El día 19 de agosto del año 2020, siendo aproximadamente las 11:49 a.m., a la altura de la Calle 17 No. 137A-15 en la ciudad de Bogotá, colisionan los vehículos; **(1)** camión de estacas, servicio público y de carga, marca Chevrolet, modelo 2015, placas ZAP 957, registrado bajo la sociedad comercial “Turbo Transportes”, propiedad de la señora Aracely Vidal Ibarra identificada con la cédula de ciudadanía No. 48.571.623, y; **(2)** motocicleta, marca honda, modelo 1997, placas NWT 32A, de propiedad del señor Luis Fernando Pérez Cerquera.

SEGUNDO. Al momento de la colisión, los vehículos se dirigían por la Avenida Centenario sentido occidente-oriente, trayecto que se puede evidenciar en el video que se adjunta a este escrito, en el que se logra apreciar que el camión de placas ZAP 957 asegurado por la compañía Allianz Seguros, y conducido por el señor Jorge Enrique Vargas Ocampo identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.229.380, es quién de manera imprudente colisiona la motocicleta y ocasiona el infortunio.

TERCERO. Sobre la vía en mención, se encuentran huellas de frenado y al vehículo **(1)** de placas ZAP 957 en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, se codifica con la hipótesis 157 **“por no estar atento a los demás usuarios de la vía”**, y más exactamente en el plano topográfico FPJ-17, se registran en los numerales 6 y 7 unas huellas de frenado considerables del vehículo tipo camión, y una huella de arrastre corporal al mismo vehículo.

CUARTO. La motocicleta de placas NWT 32A, conducida por la señora Adriana Ximena Carvajal Cutiva identificada con la cédula de ciudadanía No. 67.031.001, con ocasión al impacto, deja una huella de arrastre metálico que se prolonga en forma segmentada hasta la posición final de la misma motocicleta, lo cual queda consignado en el Informe Ejecutivo FPJ-3 dentro del número único de noticia criminal 110016000028202002106 de la Fiscalía 33 Seccional Unidad de Vida de Paloquemao, de la conducta punible Homicidio Accidente de Tránsito.

QUINTO. Dentro de los daños ocasionados a la motocicleta, se evidencia golpes en la parte lateral izquierda; **“8.8 Descripción Daños Materiales del Vehículo. Pendientes por experticio técnico abrasión manilla izquierda, abrasión en caja de la luz direccional delantera izquierda, abrasión a rosa pie izquierdo conductor, y acompañantes, demás por establecer”**.

SEXTO. En el lugar de los hechos, se halló por parte del primer respondiente patrullero Elmer Giovanni Murcia Cepeda, perteneciente a la Policía Nacional y quien hace entrega de la escena a la Unidad Móvil de Criminalística Omega, el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, con el nombre de Luz Stella Cutiva Gutiérrez identificada

con cédula de ciudadanía No. 36.175.763, con signos de violencia a simple vista nasorragia, bucorragia, herida en la región mentoniana costado derecho, abrasiones y escoriaciones en el dorso de la mano derecha, con ocasión al impacto recibido en la motocicleta en la que ella se transportaba y la cual fue colisionada por el camión ya referido con antelación.

SÉPTIMO. Ante el impacto recibido, la señora Adriana Ximena Carvajal Cutiva no pudo velar por el seguimiento y correcto traslado a medicina legal del cuerpo de su señora madre, pues debido a las lesiones que sufrió, la señora Adriana fue trasladada a MEDICENTRO FAMILIAR IPS a través del SOAT (aseguradora Seguros del Estado S.A.).

OCTAVO. La señora Adriana Ximena Carvajal Cutiva hija de la señora Luz Stella Cutiva, no sólo se ha visto afectada psicológicamente y traumada por las condiciones y circunstancia de tiempo, lugar y modo en la que ocurrió el accidente de tránsito y ser testigo del deceso de su señora madre, sino también la ha afectado profundamente la ausencia de esa compañía maternal en su diario vivir y en su vivienda familiar, aspecto que puede ser plenamente comprobado con las fotografías que se anexan.

NOVENO. El abrupto deceso de la señora Luz Stella Cutiva, se dió a la corta edad que tenía de los cincuenta y seis (56) años, privando de igual manera a la señora Adriana Ximena, de la ayuda económica que recibía de su señora madre por su labor independiente, para costear los gastos en la vivienda en que las dos convivían.

DÉCIMO. La señora Adriana Ximena Carvajal Cutiva, registra como hija de Luz Stella Cutiva Gutiérrez y Francisco Jairo Carvajal Beetar, los dos en su condición de fallecidos, y no cabe duda que enfatiza aún más, el profundo impacto en su diario vivir que genera el verse privada del apoyo y compañía de su madre, pues ya había tenido que convivir con la ausencia de su progenitor Sr. Carvajal Beetar.

DÉCIMO PRIMERO. A la señora Adriana Ximena, la han señalado en su familia a causa del accidente, en el que perdió la vida la señora Luz Cutiva, situación que ha sido muy traumática y ha influido directamente en su relación con los demás y más directamente con su entorno familiar, por los reiterados reproches a causa de la ausencia del ser querido.

DÉCIMO SEGUNDO. La presente reclamación se hace dentro de los términos contemplados en el Artículo 1081 del Código de Comercio.

II. PRETENSIONES.

Las mismas recaen en la reparación mediante indemnización, de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que se tasarán, generados en virtud del accidente de tránsito, en el que sufre un impacto el vehículo tipo motocicleta conducido por la señora Adriana Ximena Carvajal Cutiva, y en el que fallece su señora madre Luz Stella Cutiva Gutiérrez (Q.E.P.D.), por consiguiente, forjando una serie de trastornos económicos, y ante todo el grave perjuicio moral, psicológico (gran sufrimiento, angustia y dolor) que ha suscitado los hechos, al no poder seguir disfrutando de la compañía de su madre, ejercer las actividades que normalmente disfrutaba con ella en vida, y que le permitían tener una libre socialización en su entorno; algo similar ocurre de cara a su familia, eventos que ya no realizará puesto que fueron truncados por el siniestro ocurrido el día 19 de Agosto de 2020, cuando las señoras Adriana Ximena Carvajal Cutiva y Luz Stella Cutiva Gutiérrez (Q.E.P.D.) fueron colisionadas por el vehículo tripulado por el señor Jorge Enrique Vargas Ocampo, de placas ZAP 957 y asegurado por la compañía de seguros Allianz Seguros S.A.; conductor que con su actuar imprudente al omitir estar atento a los demás usuarios en la vía, y cómo se puede apreciar de manera verídica en el video que captó la terrible y desastrosa secuencia, causa un grave trauma que posteriormente ha dejado los perjuicios ya referidos, y que nos lleva a precisarlos enseguida.

Dentro del Código de Comercio, se ha estimado el Seguro de Responsabilidad y la respectiva ocurrencia del siniestro, con firmeza y edificados sus pilares con solidez, base de nuestro escrito y sobre los cuales se instauran los argumentos del presente ítem:

“ARTÍCULO 1127. <DEFINICIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD>. <Artículo subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.

ARTÍCULO 1131. <OCURRENCIA DEL SINIESTRO>. <Artículo subrogado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.”

Al igual que lo consagrado por la Doctrina, en el entendido que:

“El seguro obligatorio de responsabilidad civil puede cubrir indistintamente los daños físicos de las personas y los daños a los bienes,

(...)

El seguro de responsabilidad civil, en cambio, por definición, está destinado a cubrir tanto daños personales de las víctimas como daños causados a los bienes de las mismas; ambos pueden significar esa deuda de responsabilidad, ese menoscabo patrimonial del asegurado responsable que justifica la existencia del seguro. Por ello es que los países en los cuales se ha consagrado el seguro obligatorio como de responsabilidad civil, ese seguro ha podido sin dificultad ocuparse también de la reparación de los daños a bienes de terceros afectados con los accidentes, (...)”¹

▪ **Cálculo de la Tasación de Perjuicios Patrimoniales y Extrapatrimoniales.**

En consecuencia de la conducta desarrollada por el señor Jorge Enrique Vargas Ocampo, conductor del vehículo matriculado con placas ZAP 957, por la que se ocasionaron perjuicios a la señora Adriana Ximena Carvajal Cutiva de carácter patrimonial y extrapatrimonial, solicitamos sea cancelada una cuantía de **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$218.295.294)**, discriminada así:

○ **TASACIÓN DE PERJUICIOS.**

Al respecto conviene decir que, es indispensable para tasar en debida forma los perjuicios generados por la conducta imprudente del conductor del vehículo con placas ZAP 957, tener en cuenta los pronunciamientos de las altas cortes que al respecto ha indicado:

“ (...) cuando la actividad peligrosa del agente es causa exclusiva del daño, éste será responsable en su integridad.

(...)

También, el juzgador, dejó de aplicar los artículos 1º, 2º, 55 y 61 de esa Ley, por regir en todo el territorio nacional a la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, etc. y vehículos por las vías públicas o privadas que internamente circulen vehículos y que imponen a todo conductor, pasajero o peatón “comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito”, y, en

¹ Andrés E. Ordóñez Ordóñez. “El Contrato de Seguro”, Universidad Externado de Colombia (1998) Bogotá-Colombia, Pag 163-165.

particular, al conductor “abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento”.²

En primer lugar, la conducción de vehículos es considerada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA como **actividad peligrosa**, y se sujeta a un régimen especial, es por esto que señalaremos a la compañía aseguradora la responsabilidad del tomador asegurado en el accidente por los perjuicios deprecados.

“En este orden de ideas, la Corte se ha referido en varias oportunidades a los sistemas de acuerdo con los cuales se gobierna en el país la responsabilidad civil extracontractual, señalando que ella, para el efecto, se divide en tres grandes grupos: “El primero, constituido por los artículos 2341 y 2345 que contienen los principios “directores” de la responsabilidad delictual y cuasi delictual por el hecho personal; el segundo formado por los artículos 2346, 2347, 2348, 2349 y 2352 que regulan lo relativo a la misma responsabilidad por el hecho de personas que están bajo el cuidado o dependencia de otro, y el tercero, que comprende los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, se refiere a la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas e inanimadas, y ofrece a su turno dos variantes “... según que las cosas sean animadas o inanimadas, doctrinariamente denominadas responsabilidad por causa de los animales o por causa de las cosas inanimadas, que respectivamente tienen su fundamento legal en los artículos 2353 y 2354 para aquella, y 2350, 2351, 2355 y 2356 para ésta ...” (G.J. Tomo CLXXII, pág. 76). En sentencia de 12 de mayo de 1939 (G.J., tomo XLVIII, pág. 23), se sentaron por primera vez las bases de esta tan importante distinción y de ese fallo son los siguientes apartes: “(...) pero fuera de esta responsabilidad directa, hay otra que no por indirecta es menos eficaz, en virtud de la cual estamos obligados a responder del hecho dañoso de personas que están bajo nuestra dependencia, o de las cosas animadas o inanimadas cuya guarda o custodia nos compete. Esta ya es una responsabilidad de carácter excepcional, porque no proviene inmediatamente del acto personal del interesado, sino de presunciones de culpa que la ley establece contra el responsable. (...). Antecedente de la anterior doctrina, es el fallo de 14 de marzo de 1938, que no solo señaló la distinción entre los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, sino que concluyó que si por regla general la carga de la prueba en materia extracontractual corresponde al demandante, por excepción, como cuando se trata de la responsabilidad (...) por el daño de las cosas inanimadas que están bajo el cuidado de los hombres, la prueba se desplaza del demandante para recaer sobre el demandado por la presunción de culpa que establece la ley en varios textos como los artículos 2346 y 2356 del Código Civil...” y aludiendo a esta última norma y su razón de ser, agregó que “mal puede reputarse como repetición de aquél (el 2341), ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde. Así es de hallarse desde luego en vista de su redacción y así lo persuaden, a mayor abundamiento, los ejemplos que aduce o plantea para su mejor inteligencia, a manera de que casos que especialmente se debe reparar el daño a que esta disposición legal se refiere, que es, todo el que ‘puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona’. Exige, pues, tan solo que el daño pueda imputarse” (Sent. 2 de diciembre de 1943 -G.J. LVI pág. 320- igual sentido Sent. 18 Noviembre de 1940. G.J. L, pág. 440, Sents. 31 mayo 1938, junio 24 1942, 7 de julio de 1977).

² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 18 de septiembre de 2009.Exp. 20001-3103-005-2005-00406-01. M.P. WILLIAM NAMÉN VARGAS.

Y precisando aún más los conceptos, anteriores, esta Corporación en fallo del 18 de abril de 1939 (G.J. XLVIII pág. 165) dijo "El artículo 2347 del C.C., establece el principio de la responsabilidad por hechos, ajenos, y el artículo 2356 del mismo texto, sienta esta norma, bien se trate de responsabilidad directa o indirecta: 'por regla general todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta'. Los ejemplos que allí se mencionan son ilustrativos y se refieren a hechos en que el daño aparece en la cosa misma, por cierta peligrosidad que en ella se transparenta. La Corte ha sostenido la doctrina de que conforme a la disposición del artículo 2356 del C.C., existe una presunción de responsabilidad en contra del agente respectivo, en los casos de daños causados por ciertas actividades que implican peligros, inevitablemente anexos a ellas, responsabilidad por la cual no se exonera de la indemnización, sino en cuanto se demuestre caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elementos extraños".

Siguiendo, pues, una larga tradición jurisprudencial cuyas directrices cardinales acaban de transcribirse, preciso es tener muy presente que ante situaciones semejantes a las descritas, donde por hipótesis el daño, sin ser efecto inmediato y directo de una culpa probada atribuible a determinado sujeto a título personal, lo es de la intervención causal de una actividad en la cual, por los peligros que en potencia le son inherentes, quien la lleva a cabo debe extremar en grado sumo las precauciones en la advertencia de tales riesgos y en los cuidados para evitarlos, el ordenamiento positivo en este ámbito puesto de manifiesto en el principio normativo que del texto del artículo 2356 del Código Civil se desprende, encuentra fundamento bastante para comprometer a ese empresario e imponerle la respectiva obligación de reparar, atendida la posibilidad con que contaba de controlar apropiadamente la actividad en cuestión y, por consiguiente, de custodiarla de modo indemne para los demás, obrando con la diligencia requerida a fin de suprimir la eventualidad de perjuicios como el que, a pesar de esa misión de guarda, vino a ocurrir con menoscabo injusto para la persona o los haberes de un tercero y que, por ende, atestigua de suyo la manera impropia o ineficiente como ese cometido se puso en práctica por el responsable. Dicho en otras palabras, si es postulado de valor axiomático el que el orden civil que liga a los seres humanos en sociedad, según lo señalara Domat en afortunada síntesis, no los obliga solamente a no perjudicar a nadie mediante sus propias acciones, sino también a actuar con todo lo que se posee de modo tal que nadie tampoco pueda resultar víctima de un daño que no esté obligado en derecho a soportar, forzoso es admitir que actividades que por su virtualidad especial para engendrar daños participan del género que, por vía de ilustrativos ejemplos, identifica el artículo 2356 del Código Civil, implican la existencia de una obligación legal de resultado consistente en vigilar esa actividad e impedir que ella, por su propio dinamismo o debido a circunstancias anormales que la rodearon en un momento dado, escape al control de quien de la aludida actividad se sirve o reporta beneficio, luego si en la realización de un daño se demuestra que tuvo influencia causal caracterizada un hecho de la índole de los que viene haciéndose mérito en estas consideraciones, en términos de ley ello es suficiente para tener por probada, por vía de una presunción que establece aquella disposición, la infracción de la obligación determinada de guarda recién aludida. La causalidad basta para tener por establecida la culpa en aquellos casos en que, atendidas la naturaleza propia de la actividad y las circunstancias precisas en que el hecho dañoso se realizó, la razón natural permite imputar este último a la incuria o imprudencia de la persona de quien se demanda la reparación, e inútil será por lo tanto que este último, guardián de la actividad y demandado en el proceso, intente establecer que observó la diligencia debida; su defensa, entonces, no puede plantearse con éxito en el terreno de la culpabilidad sino en el de la causalidad, rindiendo la prueba de la causa extraña del perjuicio, originada en el caso fortuito o en la fuerza mayor, en el hecho de la víctima o en el hecho de un tercero.

(...)

(G.J. Tomo CXLII, pg. 173), siempre en el entendido que en la aplicación exacta de este sistema de imputación de la obligación resarcitoria extracontractual, no tiene relevancia, al menos en principio, el que en la producción del daño cuya reparación se demanda, hayan intervenido cosas que no tienen

por fin el movimiento en un lugar fijo -como las máquinas de una industria- o desplazándose -como sucede con los automotores en marcha-, toda vez que, tanto las cosas inertes como las que no lo son, pueden ser puestas circunstancialmente por el hombre en situación de riesgo inminente para terceros y, por lo mismo, ocasionarles perjuicios a pesar de hallarse en reposo, como si una edificación destinada al recaudo de tasas por peaje, es colocada en medio de la calzada en una carretera de intenso tránsito en parajes rurales y es atropellada por un vehículo, debido a la ausencia de las advertencias necesarias.”³

En segundo lugar, y todo esto parece confirmarse en pronunciamientos más recientes de jurisprudencia de la C.S.J., tal como:

“... aquel a quien se pueda imputar jurídicamente un daño está obligado a repararlo. (2) En particular, el daño puede imputarse a la persona (a) cuya conducta culposa lo haya causado; o (b) cuya actividad anormalmente peligrosa lo haya causado; o (c) cuyo auxiliar lo haya causado en el ejercicio de sus funciones”, precisando que, se “es responsable sobre la base de la culpa por la violación dolosa o negligente del estándar de conducta exigible” (art. 4), para señalar una noción objetiva de culpa consistente en la “conducta exigible” tomando por referente el patrón estándar de “una persona razonable que se halle en las mismas circunstancias” (art. 4:102 (1) PETL), susceptible de variar y adaptarse por las características de la categoría de personas a que se pertenece y en cuya determinación se tendrán en consideración la “naturaleza y valor del interés protegido de que se trate”, entre más importante mayor la exigencia para evitar el daño, “la peligrosidad de la actividad” y la “pericia exigible a la persona” que la desarrolla según un nivel de diligencia superior al corriente, “la previsibilidad del daño” ex ante, la “relación de proximidad o de especial confianza entre las personas implicadas”, “la disponibilidad y coste de las medidas de precaución y de los métodos alternativos” y también “deben tenerse en cuenta las normas que prescriben o prohíben una determinada conducta” (normas de tránsito, construcción, reglamentos);...”.

(...)

2. Por haberse perpetuado en la conciencia del hombre la ingénita necesidad de recuperar y mantener la equidad y el equilibrio social para obtener la justicia en el diario vivir, la aparición del maquinismo, la proliferación de accidentes asociados al transporte y la circulación de vehículos, la utilización de artefactos, instrumentos, sustancias y el despliegue de actividades riesgosas, repercutieron en la esfera de la responsabilidad civil retomando un papel preponderante su faceta objetiva, pues, exponen Georges RIPERT y Jean BOULANGER, “aunque el Código Civil haya admitido un principio general de responsabilidad, la regla general se ha revelado insuficiente para asegurar la reparación del perjuicio en razón del aumento considerable del número de los daños y principalmente de los accidentes corporales. La gran industria, al desarrollar el maquinismo e imponer la aglomeración de los obreros en las fábricas, ha tenido por consecuencia el accidente de trabajo. Este se ha vuelto frecuente, inclusive en los trabajos agrícolas, con el empleo de las máquinas. El accidente de tránsito es más frecuente aún. El número de accidentes debido a la circulación de los automóviles sobre las rutas está en progresión constante” (*Tratado de Derecho Civil, Obligaciones*, t. v, 2ª parte, Buenos Aires, Ed. La Ley, 1956, p. 28).

(...)

6. En compendio, la doctrina de la Corte en torno de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, ha estado orientada por la necesidad de reaccionar de una manera adecuada ante los

³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 22 de febrero de 1995. Exp. 4345. M.P. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS.

daños en condiciones de simetría entre el autor y la víctima, procurando una solución normativa, justa y equitativa... la Corte, sin embargo, ha sido reiterada, uniforme y convergente, en cuanto a que la exoneración sólo puede obtenerse con prueba del elemento extraño, esto es, la fuerza mayor, el caso fortuito, la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, más no con la demostración de la diligencia exigible, o sea, con la ausencia de culpa.

Desde esta perspectiva, el fundamento normativo general de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, en la constante jurisprudencia de la Sala se ha estructurado en el artículo 2356 del Código Civil por determinadas actividades de cuyos riesgos y peligros dimana la obligación de reparar los daños con tal que puedan imputarse a la conducta de quien las desarrolla y exista una indisociable secuencia causal entre la actividad y el quebranto.

(...)

En especial, tratándose de daños causados con vehículos o en accidentes de tránsito, no debe soslayarse que con arreglo al otrora vigente artículo 261 del Decreto-Ley 1344 de 1970 modificado por el artículo 117 de la Ley 33 de 1986, “en la responsabilidad por el hecho ajeno cometido en ejercicio de actividades peligrosas, el demandado sólo se libera mediante la prueba de una causa extraña. No están exoneradas de esta responsabilidad las personas de derecho público o privado”; asimismo, la Ley 769 de julio 6 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), impone a las autoridades el deber de velar “por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público” (artículo 7°); la sujeción de los peatones, conductores y vehículos a las normas de tránsito y el acatamiento “de los requisitos generales y las condiciones mecánicas y técnicas que propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro de los reglamentos correspondientes” (artículo 27); en la circulación de vehículos se debe “garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales” (artículo 28), portar un equipo mínimo de prevención y seguridad (art. 30), tener vigente un seguro obligatorio de accidente de tránsito (artículo 42); mantener el vehículo “en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad” (art. 50), efectuar su revisión técnico-mecánica, en la conducción comportarse en “forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y deben conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito” (artículo 55), “abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento” (artículo 61).

(...)

Forzoso es concluir que, toda persona que en ejercicio de una actividad peligrosa cause un daño, está en la imperiosa obligación de repararlo y solo podrá eximirse probando la causa extraña, esto es, demostrando que no es autor, en tanto el daño no pueda imputarse al ejercicio de su actividad peligrosa ni a su conducta.”⁴

⁴ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 24 de agosto de 2009.Exp. 11001-3103-038-2001-01054-01. M.P. WILLIAM NAMÉN VARGAS.

Finalmente, y en el caso que nos convoca, al respecto del tomador de la póliza, propietario del vehículo o guardián de este, se ha precisado:

“Como es sabido, en la responsabilidad civil por los perjuicios causados a terceros en desarrollo de las llamadas actividades peligrosas, gobernadas por el artículo 2356 del Código Civil, la imputación recae sobre la persona que en el momento en que se verifica el hecho dañino tiene la condición de guardián, vale decir, quien detenta un poder de mando sobre la cosa o, en otros términos, el que tiene la dirección, manejo y control sobre la actividad, sea o no su dueño.

(...)

De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto - que desde luego admite prueba en contrario - pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario. O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmase tener. Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada” (G.J. t. CXLII, pag. 183).⁵

En el discurso teórico de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario, la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte, injustificada y dañinamente, la humanidad o el patrimonio de esta última. Fijándose por regla general en la materia, de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. El daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesarias su presencia y su justificación, para que se abra paso la indemnización de perjuicios.

“El primero de tales conceptos corresponde a las nociones de daño emergente y lucro cesante que, se itera, constituyen expresiones características del perjuicio que reviste naturaleza eminentemente patrimonial, en los términos en que han sido descritos por los artículos 1613 y 1614 del Código Civil. El segundo se identifica con la noción de daño moral, que incide o se proyecta en la esfera afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc. Y el tercero, es el denominado daño a la vida de relación, que se traduce en afectaciones que inciden en forma negativa sobre su vida exterior, concretamente, alrededor de su “... actividad social no patrimonial ...”, como se lee también en el citado fallo.

Específicamente, con respecto a las dos últimas categorías, es de notar que aunque se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables, en todo caso, ello no impide que, como medida

⁵ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01. M.P. CESAR JULIO VALENCIA COPETE.

de satisfacción, el ordenamiento jurídico permita el reconocimiento de una determinada cantidad de dinero, a través del llamado arbitrium judicis, encaminada, desde luego, más que a obtener una reparación económica exacta, a mitigar, paliar o atenuar, en la medida de lo posible, las secuelas y padecimientos que afectan a la víctima.”⁶

A. PERJUICIOS PATRIMONIALES.

“Es doctrina inveterada de esta Corte, que en punto a la reparación de daños patrimoniales ocasionados por la muerte de una persona, lo que genera la obligación de indemnizar es la privación injusta de un provecho económico que el demandante recibía del occiso, mas no el simple hecho de la muerte ni menos aún la culpa del responsable de dicho resultado.

Una vez demostrado el detrimento patrimonial, sólo resta calcular el monto de su cuantía con el fin de proferir la condena en concreto, para lo cual se tomará como punto de partida el salario mínimo devengado por la occisa, al cual habrá de restársele un porcentaje que –por presunción judicial– se estima en un 25% que la difunta debió destinar para satisfacer sus gastos personales, pues la experiencia muestra que normalmente una persona que sostiene económicamente su hogar tiene que gastar algo de sus ingresos en su propia manutención. (SC de 22 de marzo de 2007, Exp.: 5125; 15 de abril de 2009, Exp.: 1995-10351-01; 18 de diciembre de 2009, Exp.: 1998-00529-01; 17 de noviembre de 2011, Exp.: 1999-00533-01; 9 de julio de 2012, Exp. 2002-00101-01)

Por consiguiente, será el 75% del salario mínimo la cantidad que habrá de tomarse como base para la liquidación, divididos en tres partes iguales, una para el cónyuge supérstite y una para cada uno de los hijos.”⁷

1. DAÑO EMERGENTE.

Dentro de los perjuicios patrimoniales encontramos el daño emergente, que son todos los emolumentos o gastos consignados por parte de la víctima o sus familiares para atender la calamidad y los eventos que se deriven del daño, como lo son los daños a los bienes o cosas de las víctimas y demás que se requieran y que se generaron con ocasión al daño proporcionado por el victimario, como lo fueron los gastos de traslados funerarios en que debió incurrir el señora Adriana Ximena, para las exequias de su señora madre Luz Stella Cutiva Gutiérrez, los cuales se relacionan de la siguiente manera:

⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA CASACIÓN CIVIL, Sentencia 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01. M.P. CESAR JULIO VALENCIA COPETE.

⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 30 de septiembre de 2016.Exp. 05001-31-03-003-2005-00174-01. M.P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ.

Al respecto conviene decir, que aún estando en incapacidad médica la señora Adriana Ximena con ocasión al accidente de tránsito, tuvo que incurrir en gastos de traslado a la funeraria para la velación, servicio de inhumación o cremación de su señora madre y víctima, así:

Mes	De	Hasta	Ciudad	Costo traslado
Agosto	Transversal 71d No. 4-07	Carrera 13 No. 54-80	Bogotá	\$17.800
	Carrera 13 No. 54-80	Transversal 71d No. 4-07		\$21.500
	Transversal 71d No. 4-07	Carrera 13 No. 54-80		\$16.900
	Carrera 13 No. 54-80	Transversal 71d No. 4-07		\$18.000
	Transversal 71d No. 4-07	Carrera 13 No. 54-80		\$19.200
	Carrera 13 No. 54-80	Transversal 71d No. 4-07		\$20.400
Total de traslados:				\$113.800

Rubro que arroja una suma total de CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$113.800).

Y con base en la actualización:

$$Ra = 113.800 \times \frac{109,14}{104,96} \text{ (IPC julio 2021)}^8$$

$$\circ = 113.800 \times 1,0398 = \$118.329$$

$$S = 118.329 \times (1,004867)^{11}$$

$$\circ = 118.329 \times 1,054 = \underline{\underline{\$124.718}}$$

Para obtener un total de Daño Emergente de **CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$124.718)**.

“Establece el Código Civil en el artículo 1614, que se entiende por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardando su cumplimiento.

⁸ IPC información técnica (dane.gov.co).

De manera, que el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad.

Dicho en forma breve y precisa, el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado.”⁹

2. LUCRO CESANTE.

Conforme a lo dispuesto en Artículo 1614 C.C.¹⁰ y reiterado en jurisprudencia no solo del alto tribunal en materia civil, sino también en materia de lo contencioso administrativo:

“Por su parte, el lucro cesante corresponde a la ganancia frustrada a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima. Sin embargo, vale señalar que este perjuicio corresponde a una consecuencia accesorio del hecho dañoso, por cuanto no es causada de manera directa con su ocurrencia sino que esta sujeta a la condición de que se afecte la percepción de un ingreso, lo cual puede que ocurra en algunos casos, sin que ello implique que pueda predicarse categóricamente como una consecuencia necesaria.”¹¹

Dentro de este perjuicio, encontramos que la señora Adriana Ximena Carvajal Cutiva se ha visto privada de la ayuda económica que le suministraba su madre Luz Stella Cutiva Gutiérrez (Q.E.P.D.), ya que convivían juntas en el mismo domicilio y sostenían de manera mancomunada el hogar, ayuda que cubría parte del arrendamiento del inmueble, alimentación y servicios públicos, por una suma de Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte (\$400.000) mensuales; en otras palabras, procederemos a calcularlos así:

Con ocasión a los datos estadísticos de la esperanza de vida en Colombia, para una persona como la señora Cutiva Gutiérrez, encontramos conforme a la Resolución 0110 de 2014 -SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, que el periodo indemnizable se tomará conforme a la vida probable de la víctima a la fecha del accidente, de la siguiente forma:

⁹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 7 de diciembre de 2017. Exp. 47001-31-03-002-2002-00068-01. M.P. MARGARITA CABELLO BLANCO.

¹⁰ “Entiéndese por... lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento.”

¹¹ CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B, Sentencia 29 de julio de 2013. Exp : 19001-23-31-000-1999-00288-01(21564). C.P. RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO.

Edad de la víctima al momento del accidente: 56 años
Vida probable: 29,2 años (para 56 años)= 350 meses

2.1. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO. (31 julio 2021).

Concierne a la cantidad de dinero dejada de recibir, a partir del momento en que se produjo el daño hasta el instante en que se efectúa la liquidación.

$$Ra = 400.000 \times \frac{109,14 \text{ (IPC julio 2021)}^{12}}{104,96 \text{ (IPC agosto 2020)}}$$

$$\circ = 400.000 \times 1,0398 = \$415.920$$

$$S = 415.920 \times \frac{(1+0,004867)^{11} - 1}{0,004867}$$

$$\circ = 415.920 \times 11,2716 = \underline{\underline{\$4.688.083}}$$

2.2. LUCRO CESANTE FUTURO. (Desde 31 agosto 2021).

Ahora bien, dinero que se dejará de percibir desde el momento en que se efectúa la liquidación hasta el final del periodo indemnizable.

$$S = 415.920 \times \frac{(1,004867)^{339} - 1}{0,004867 (1,004867)^{339}}$$

$$\circ = 415.920 \times 152,6315 = \underline{\underline{\$63.482.493}}$$

Para obtener un total de Lucro Cesante de **SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$68.170.576).**

¹² IPC información técnica (dane.gov.co).

B. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

“Es de verse que el juzgador tasó la indemnización apoyado en las pruebas del proceso sobre la edad del fallecido, supervivencia probable, ingreso, gastos personales, contribución a los damnificados, edad y supervivencia probable de éstos, de donde todo yerro respecto del cálculo y factores incidentes del período indemnizatorio, *verbi gratia*, la esperanza de vida del difunto y de los beneficiarios, posible fecha de conformación de un hogar independiente y porcentaje de los gastos para el propio sostenimiento, debió encausarse invocando y demostrado un error probatorio.

2. El **daño moral**, configura una típica especie de daño no patrimonial consistente en quebranto de la interioridad subjetiva de la persona y, estricto sensu, de sus sentimientos y afectos, proyectándose en bienes de inmesurable valor, insustituibles e inherentes a la órbita más íntima del sujeto por virtud de su detrimento directo, ya por la afectación de otros bienes, derechos o intereses sean de contenido patrimonial o extrapatrimonial.

(...)

3. El daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “*que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo*” (cas.civ. sentencia 13 de mayo de 2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos, concretándose en el menoscabo “de los sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso” (Renato Scognamiglio, voz *Danno morale*, en *Novissimo Digesto italiano*, vol. V, Turín, Utet, 1960, p. 147; ID., *Il danno morale*, Milano, 1966; *El daño moral- Contribución a la teoría del daño extracontractual*, trad. esp. Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 1962, pp.14 ss.), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los padecimientos del ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, aptitud de sufrimiento de la persona y por completo distintos de las otras especies de daño.

En efecto, el daño moral, aún en la hipótesis de provenir de la lesión concurrente de otros intereses, por ejemplo, los derechos de la personalidad, la salud e integridad, es una entidad separada e independiente, cuyo resarcimiento es diferente, al tratarse recta y exclusivamente, del detrimento experimentado por el sujeto en su espectro interior, afectivo y sentimental, sin comprender su órbita exterior, proyecto, calidad de vida, actividad o desarrollo vivencial.

En sentido análogo, su reparación es singular e individual y no se contiene en la de otros daños, respecto de los cuales se distingue por su especificidad al recaer únicamente en los sentimientos y afectos, a consecuencia del quebranto de derechos, intereses o valores de naturaleza, ya patrimonial, bien no patrimonial, con los cuales no se confunde.

En el empeño de encarar directamente el asunto, la Sala precisa que, para la valoración del *quantum* del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador.

Por consiguiente, la Corte itera que la reparación del daño causado y todo el daño causado, cualquiera sea su naturaleza, patrimonial o no patrimonial, es un derecho legítimo de la víctima y en asuntos civiles, la determinación del monto del daño moral como un valor correspondiente a

su entidad o magnitud, es cuestión deferida al prudente arbitrio del juzgador según las circunstancias propias del caso concreto y los elementos de convicción.”¹³

También es cierto, lo dicho por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

“Respecto de la indemnización del perjuicio moral y del daño a la vida de relación, que el apelante solicitó se incremente al máximo admitido por la jurisprudencia patria en casos similares, es del caso recordar que:

*En el empeño de encarar directamente el asunto, la Sala precisa que, para la valoración del quantum del **daño moral** en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador.*

Por consiguiente, la Corte itera que la reparación del daño causado y todo el daño causado, cualquiera sea su naturaleza, patrimonial o no patrimonial, es un derecho legítimo de la víctima y en asuntos civiles, la determinación del monto del daño moral como un valor correspondiente a su entidad o magnitud, es cuestión deferida al prudente arbitrio del juzgador según las circunstancias propias del caso concreto y los elementos de convicción.

Al respecto, '[d]entro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales' (artículo 16 de la Ley 446 de 1998; cas. civ. sentencias de 3 de septiembre de 1991, 5 de noviembre de 1998 y 1º de abril de 2003), es decir, se consagra el resarcimiento de todos los daños causados, sean patrimoniales, ora extrapatrimoniales, aplicando la equidad que no equivale a arbitrariedad ni permite 'valoraciones manifiestamente exorbitantes o, al contrario inicuas y desproporcionadas en relación con los perjuicios sufridos' (Flavio Peccenini, La liquidazione del danno morale, in Monateri, Bona, Oliva, Peccenini, Tullini, Il danno alla persona, Torino, 2000, Tomo I, 108 ss) (CSJ, SC del 18 de septiembre de 2009, Rad. n.º 2005-00406-01; se subraya).

(...)

*En lo que toca con la cuantía del **perjuicio a la vida de relación**, cuya existencia ha sido acreditada, debe reiterarse que el hecho de que los bienes, intereses o derechos afectados tengan naturaleza intangible e incommensurable, características estas que, por esta misma razón, en ciertas ocasiones tornan extremadamente difícil un justiprecio exacto, no es óbice para que el juzgador, haciendo uso del llamado arbitrium judicis, establezca en la forma más aproximada posible el quantum de tal afectación, en orden a lo cual debe consultar las condiciones de la lesión y los efectos que ella haya producido en los ámbitos personal, familiar y social de la víctima, entre otros, desde luego, no como si se tratara estrictamente de una reparación económica absoluta, sino, más bien, como un mecanismo de satisfacción, por virtud del cual se procure al perjudicado, hasta donde sea factible, cierto grado de alivio, sosiego y bienestar que le permita hacer más llevadera su existencia (CSJ, SC del 13 de mayo de 2008, Rad. n.º 1997-09327-01; se subraya).*

¹³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 18 de septiembre de 2009.Exp. 20001-3103-005-2005-00406-01. M.P. WILLIAM NAMÉN VARGAS.

Como se ve, pese a que para la cuantificación de uno y otro perjuicio, es decir, del moral y del concerniente con la vida de relación, los jueces deben proceder conforme su prudente juicio, la determinación que adopten al respecto no puede carecer de fundamentos objetivos y, mucho menos, ser caprichosa o arbitraria, sino que, por el contrario, debe estar siempre fincada en las precisas circunstancias fácticas del caso sometido a su conocimiento.

Con otras palabras, cabe señalar, en apretada síntesis, que la fijación del *quantum* de la respectiva indemnización depende de la intensidad de dolor sufrido por la víctima, en el caso del daño puramente moral, o por la magnitud de la afectación que ella experimenta en sus relaciones interpersonales y/o en su vida cotidiana, en el caso de la segunda clase de perjuicio de que aquí se trata.”¹⁴

1. DAÑO MORAL.

Dentro de los perjuicios extrapatrimoniales encontramos los morales subjetivados, referidos a la angustia, dolor o malestar que se sufre por el impacto emocional del daño, como ha ocurrido con ocasión a la muerte de la madre de la señora ADRIANA XIMENA CARVAJAL CUTIVA, generando una gran aflicción. La señora Luz Stella Cutiva Gutiérrez lo era todo para ella, era su confidente, amiga, progenitora, y todo lo que pueda entrañar una relación estrecha; su ausencia ha sido catastrófica e insuperable, la vitalidad de la señora Cutiva era de admirar, su carisma y sensibilidad hacía todo su núcleo familiar.

Con base en lo anterior, solicitamos la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000)**, que más que una indemnización, son una compensación que harán más llevadero el dolor, la congoja, la ausencia del ser querido.

Para ello encontramos fundamento en la Jurisprudencia nacional:

“Dentro de esta clase de daños se encuentra el perjuicio moral, respecto del cual esta Corte tiene dicho que hace parte de la esfera íntima o fuero psicológico del sujeto damnificado, toda vez que sólo quien padece el dolor interior conoce la intensidad de su sufrimiento, por lo que éste no puede ser comunicado en su verdadera dimensión a nadie más. De ahí que el perjuicio moral no es susceptible de demostración a través de pruebas científicas, técnicas o directas, porque su esencia originaria y puramente espiritual impide su constatación mediante el saber instrumental. Por cuanto el dolor experimentado y los afectos perdidos son irremplazables y no tienen precio que permita su resarcimiento, queda al prudente criterio del juez dar, al menos, una medida de compensación o satisfacción, normalmente estimable en dinero, de acuerdo a criterios de

¹⁴ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 19 de diciembre de 2017. Exp. 08001-31-03-009-2007-00052-01. M.P. ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO.

razonabilidad jurídica y de conformidad con las circunstancias reales en que tuvo lugar el resultado lamentable que dio origen al sufrimiento.

Lo anterior, desde luego, «no significa de suyo que esa clase de reparación sea ilimitada, bastándole por lo tanto a los demandantes, en un caso dado, reclamarla para dejarle el resto a la imaginación, al sentimiento o al cálculo generoso de los jueces». (CSJ, SC del 15 de abril de 1997) La razonabilidad de los funcionarios judiciales, por tanto, impide que la estimación del daño moral se convierta en una arbitrariedad.

Esta razonabilidad surge de la valoración de referentes objetivos para su cuantificación, tales como las características del daño y su gravedad e intensidad en la persona que lo padece; de ahí que el *arbitrium iudicis* no puede entenderse como mera liberalidad del juzgador.

(...)

Siguiendo las pautas reseñadas, se tasarán los perjuicios morales sufridos por los demandantes en la suma de \$60'000.000 para cada uno de los padres; \$60'000.000 para el esposo; y \$60'000.000 para cada uno de los hijos.

El anterior monto se estima razonable, puesto que esta Sala, en circunstancias fácticas similares, ha condenado en el pasado al pago de \$53.000.000 (SC del 17 de noviembre de 2011, Exp. 1999-533), y \$55.000.000 (SC del 9 de julio de 2012, Exp. 2002-101-01).

De manera que es apenas justificable que en cuatro años, el monto de los referidos perjuicios sufra un incremento o ajuste moderado. Al respecto nuestra jurisprudencia tiene establecido:

«Adviértase que no se trata de aplicar corrección o actualización monetaria a las cifras señaladas por la Corte de antaño, por cuanto el daño moral no admite indexación monetaria, sino de ajustar el monto de la reparación de esta lesión, como parámetro de referencia o guía a los funcionarios judiciales, a las exigencias de la época contemporánea...» (SC del 17 de noviembre de 2011, Exp. 1999-533)”¹⁵

2. DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN.

“En este orden de ideas, la Corte, a manera de compendio, puntualiza que el daño a la vida de relación se distingue por las siguientes características o particularidades: a) tiene naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado; b) adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho; c) en las situaciones de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o económico; d) no sólo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino también en la afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la de otro tipo de intereses legítimos; e) según las circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el compañero o la compañera permanente, los parientes cercanos o los amigos, o por aquélla y éstos; f) su reconocimiento persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de

¹⁵ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 30 de septiembre de 2016. Exp. 05001-31-03-003-2005-00174-01. M.P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ.

él se derivan; y g) es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de daño - patrimonial o extrapatrimonial - que posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con éstos, como si se tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las víctimas.

(...)

Una vez sentadas estas bases, para la Sala es claro que, como otrora lo insinuó la jurisprudencia de esta Corporación, a la luz de las normas constitucionales y legales que directa o indirectamente gobiernan la responsabilidad civil, el daño a la vida de relación es de completo recibo por parte del ordenamiento jurídico nacional y, por lo mismo, se torna merecedor de la protección que han de dispensar los jueces de la República, en aquellos casos en que, encontrándose debida y cabalmente acreditado, sea menester adoptar las medidas idóneas para su reconocimiento.”¹⁶

No cabe duda de la perturbación y alteraciones de la vida personal, social y familiar de Adriana Ximena, que han hecho hincapié en el señalamiento de un entorno afectivo y amistoso; entorno que se ha esquivado, dado a que la muerte se produjo con ocasión al traslado que en motocicleta se encontraba disfrutando la señora Luz Stella Cutiva Gutierrez, cuando de manera intempestiva es chocada por el vehículo tipo camión asegurado por Allianz Seguros, y con ello se produce la caída de su madre; aspecto que ha sido duramente criticado, señalado, condenado, y que su privación no ha permitido tener un desenvolvimiento como ella lo disfrutaba anterior al fatídico suceso.

En ese orden de ideas, consideramos que éste rubro debe estar sujeto al reconocimiento de una cuantía estimada en **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$90.000.000)**.

La anterior cifra, tiene asidero en una ya renombrada jurisprudencia:

“7.3.1 Huelga memorar que si bien la jurisprudencia colombiana al referirse en un comienzo a los perjuicios extrapatrimoniales solamente aludía a los morales, lo cierto es que hoy reconoce que de esa naturaleza participa el denominado “daño a la vida de relación”, aceptando que éste tiene una entidad jurídica propia y, por ende, no puede confundirse con otras clases de agravios que posean alcance y contenido disímil, ni subsumirse en ellos.

Un primer paso lo dio la Corte cuando en el fallo de 4 de abril de 1968 contempló el “daño a la persona”, y señaló que consistía en “un desmedro a la integridad física o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad”, susceptible de “proyectarse en quebrantos en la vida de relación y de repercutir en el equilibrio sentimental del sujeto”; posteriormente, sea oportuno relievarlo, el legislador previó que el daño moral no era el único de carácter inmaterial, pues

¹⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA CASACIÓN CIVIL, Sentencia 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01. M.P. CESAR JULIO VALENCIA COPETE.

estableció en el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970 que “la persona a quien se discute el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como **la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido**” (destaca la Corte).

Empero, en la sentencia de 13 de junio de 1997 sostuvo que aquel no tenía una entidad jurídica propia, en cuanto lo conformaban agravios de índole material y moral, tesis que abandonó a partir del pronunciamiento que emitió el 25 de septiembre de 1997, pues reconoció que era una especie de daño extrapatrimonial distinto al moral, aunque continuó llamándolo fisiológico, término cuyo alcance precisó en el fallo de 19 de julio de 2000, en el que dejó en claro que no era sinónimo de la expresión “daño a la vida de relación”, ya que ésta corresponde a un concepto mucho más comprensivo y, por ende, resultaba inadecuado el uso de aquel. Explicó, también, que la afectación a que hace referencia la última locución podía “tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas” y que ella no sólo se circunscribe a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, como pareciera desgajarse de la denominación *préjudice d' agrement* dada por la doctrina francesa, sino en general a las actividades rutinarias que la víctima ya no podrá realizar o que demandan de ella un esfuerzo excesivo para ejecutarlas.

Desde este último pronunciamiento, la jurisprudencia administrativa viene empleando la dicción “daño a la vida de relación”, entendiendo que éste no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que en razón de aquella se producen en la vida de relación del afectado, de tal modo que modifica el comportamiento social de éste o altera de manera significativa sus posibilidades vitales (sentencia de 28 de septiembre de 2000, exp.11755).

Colígrese, entonces, que está acreditada la existencia del perjuicio extrapatrimonial padecido por la víctima en su vida exterior, el que, a buen seguro, seguirá incidiendo negativamente en ella; por consiguiente, se impone acudiendo al *arbitrium judicis* tasarlo en noventa millones de pesos (\$90.000.000.00) m/cte., cantidad que se reducirá en un 30%, dada la incidencia que tuvo su comportamiento en la producción de aquel. Por tanto, esa condena ascenderá a sesenta y tres millones de pesos (\$63.000.000.00) m/cte., la que muy probablemente por la magnitud del daño apenas será un paliativo al mismo.”¹⁷

Para terminar, es necesario que se le reconozca como indemnización y en compensación una suma de dinero que de algún cumpla con el resarcimiento de los perjuicios causados a la señora ADRIANA XIMENA CARVAJAL CUTIVA, que corresponden en síntesis a:

Perjuicios de naturaleza patrimonial:

Daño emergente \$124.718.

Lucro Cesante \$68.170.576

¹⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 20 de enero de 2009. Exp. 170013103005 1993 00215 01. M.P. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA.

Perjuicios de naturaleza extrapatrimoniales:

Daño Moral: \$60.000.000.

Daño a la Vida de Relación: \$90.000.000.

De igual manera expresamos a la compañía aseguradora nuestro ánimo conciliatorio, y nuestra creencia en los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, para resarcir los perjuicios que fueron causados y con esto garantizar el derecho fundamental de la víctima a la Reparación.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Esta pretensión reposa en el principio según el cual, el hecho dañino genera perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a las personas directamente o su patrimonio, que los responsables legalmente están obligados a indemnizar, fundado en:

- CÓDIGO DE COMERCIO. Arts. 1074,1079, 1081 y s.s., 1088, 1089, 1127, y 1131.
- CÓDIGO CIVIL. Arts. 1494, 1613, 1614, 1617, 2341, 2342, 2343, y 2344.
- Ley 446 de 1998.
- RESOLUCIÓN 0110 de 2014 (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA)
- Y en Jurisprudencia de las Honorables Altas Cortes, relacionadas en cada una de las intervenciones:
 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 22 de febrero de 1995. Exp. 4345. M.P. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS.
 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01. M.P. CESAR JULIO VALENCIA COPETE.
 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 20 de enero de 2009. Exp. 170013103005 1993 00215 01. M.P. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA.
 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 24 de agosto de 2009.Exp. 11001-3103-038-2001-01054-01. M.P. WILLIAM NAMÉN VARGAS.
 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 18 de septiembre de 2009.Exp. 20001-3103-005-2005-00406-01. M.P. WILLIAM NAMÉN VARGAS.

- CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B, Sentencia 29 de julio de 2013. Exp : 19001-23-31-000-1999-00288-01(21564). C.P. RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO.
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 30 de septiembre de 2016.Exp. 05001-31-03-003-2005-00174-01. M.P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ.
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 7 de diciembre de 2017. Exp. 47001-31-03-002-2002-00068-01. M.P. MARGARITA CABELLO BLANCO.
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia 19 de diciembre de 2017. Exp. 08001-31-03-009-2007-00052-01. M.P. ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO.

IV. DECLARACIÓN JURAMENTADA.

Bajo la gravedad de juramento declaramos como apoderadas de la señora Adriana Ximena Carvajal Cutiva, que no se ha promovido ni por ella, ni por las apoderadas o distintos apoderados o persona que llegare a representar los derechos de la señora Carvajal, proceso ante jurisdicción civil, encaminada a obtener reparación de los daños y perjuicios ocasionados con el hecho punible.

V. PRUEBAS.

A la presente reclamación, me permito allegar las pruebas documentales en copia simple y una grabación de video, adicional a la solicitada por ustedes como conducto regular de radicación de la reclamación:

1. Registro Civil de Nacimiento de Adriana Ximena Carvajal Cutiva, de la Notaria Segunda de Neiva (Huila).
2. Informe policial de accidente de tránsito No. A001180536.
3. Plano topográfico FPJ-17 del número único de noticias criminal 110016000028202002106.
4. Informe ejecutivo FPJ-3 del número único de noticias criminal 110016000028202002106.
5. Acta de inspección técnica a cadáver FPJ-10 del número único de noticias criminal 110016000028202002106.
6. Informe de Lofoscopia forense.
7. Oficio No. 5897 "Entrega de cadáver".
8. Cédula de ciudadanía Jorge Enrique Vargas Ocampo C.C. No. 80.229.380. (conductor vehículo ZAP957).

9. Licencia de conducción Jorge Enrique Vargas Ocampo.
10. Tarjeta propiedad vehículo de placas ZAP957.
11. SOAT vehículo ZAP957.
12. Certificado de cancelación de documento de identificación por muerte del señor Francisco Jairo Carvajal Beetar C.C. No. 77.008.468.
13. DVD con video del accidente de tránsito de fecha 19 de agosto de 2020 a las 11:49:17.
14. Fotografías de la señora Luz Stella Cutiva Gutiérrez.

VI. ANEXOS.

Aunado a las pruebas, nos permitimos adjuntar las siguientes:

1. Poder.
2. Tarjeta profesional Claudia Patricia Quinche Fúneme No. 266.712.
3. Tarjeta profesional Yuly Alexandra Solano Solano No. 171.144.
4. Cédula de ciudadanía Adriana Ximena Carvajal Cutiva C.C. No. 67.031.001.

VII. NOTIFICACIONES.

Las notificaciones las recibiremos en la Carrera 72B No. 8-69 (Bogotá), teléfono (57+1) 8148959, y a los correos electrónicos: claudia.quinche@qyd.co / a.solano@aliacol.com.

Cordialmente,



CLAUDIA P. QUINCHE FÚNEME
C.C. No. 1.030.574.650
T.P. No. 266.712 del C.S. de la J.
Cel. 3003458806
E-mail: claudia.quinche@qyd.co



YULY A. SOLANO SOLANO
C.C. No. 53.168.214 de Bogotá.
T.P. No. 171.144 del C.S. de la J.
Cel. 3003458806
E-mail: a.solano@aliacol.com